

La presente resolución en su versión original contiene datos personales y elementos de carácter confidencial. En ese contexto, es oportuno proteger la esfera privada de sus titulares. En tal sentido, conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se extiende la siguiente versión pública

18-SI-2019

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL: San Salvador, a las quince horas y treinta y cinco minutos del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.

El presente procedimiento inició el seis mayo del presente año, por medio de solicitud de información presentada por el señor [REDACTED].

Considerandos:

I. Relación de los hechos.

El ciudadano [REDACTED], solicitó información administrada por el TEG así: “1. Estado o etapa en que se encuentra el proceso de selección de la plaza de investigador para la sede de San Miguel, publicada el nueve de abril en la página oficial de Facebook del TEG; 2. Cuántas personas aplicaron al proceso de selección y cuántos han sido descartados del proceso y porque motivos. Justificar en cada uno de ellos; 3. Qué pruebas o métodos de selección se han utilizado en el concurso de la plaza antes referida y explicar todo el procedimiento que hace falta; 4. Cuánto tiempo durará el proceso de selección hasta saber la persona que se contratará; 5. Cuál es el periodo establecido para finalizar estos concursos de selección de personal y 6. Qué Unidad es la encargada y que personas están a cargo de llevar este concurso de selección de personal”.

Se determinó que, por su naturaleza, la información solicitada es administrada por la Unidad de Recursos Humanos de este tribunal, por lo cual, le fue requerida mediante memorando 24-UAIP-2019, de fecha siete del mes en curso.

Así las cosas, la unidad requerida trasladó la información solicitada por el señor [REDACTED]

II. Fundamentos de Derecho.

El artículo 6 de la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresar y difusión del pensamiento, siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. Por otra parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, señalan que el acceso a la información es una herramienta eficaz para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción; por lo cual es obligación del Estado garantizar su libre y democrático ejercicio.

En el marco de la competencia subjetiva, los artículos 50 y 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP–, otorgan a los oficiales de información las potestades requeridas en el tratamiento de las solicitudes de información.

Además, los artículos 36 y 66 de la LAIP, 50, 52, 54 y 55 de su Reglamento indican los requisitos que debe contener la solicitud de información, así como el análisis de admisibilidad que se hará sobre la misma, debiendo en todo caso fundar y motivar la decisión adoptada a fin de evidenciar la certeza de lo afirmado - *Ratio iuris*-.

En el caso particular, luego de verificada la solicitud del ciudadano [REDACTED], se ha concluido que cumple los requisitos de admisibilidad, no obstante se hacen las siguientes consideraciones:

i) El artículo 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece a su tenor que “*Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna*”.

ii) En ese contexto, para *Egbert John Sánchez Vanderkast* en su obra “*La Información Gubernamental y el Acceso a la Información Pública*”; sostiene que, *la información pública* es “*la prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de entidades públicas y empresas privadas que ejercen gasto público y/o funciones de autoridad*” (sic).

iii) En ese orden, la información que las personas puedan requerir a las instituciones de gobierno es aquella que: “*haya sido generada o esté siendo administrada por dichos entes*” en el ejercicio de sus funciones y, cuya tenencia y resguardo se derive de un mandato de ley (*Resolución pronunciada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, en el proceso de amparo 713-2015*). Por tal razón es posible acceder a este punto.

iv) Finalmente, se ha concluido que lo solicitado por [REDACTED], no constituye información reservada ni confidencial, por tal razón es procedente acceder a lo solicitado.

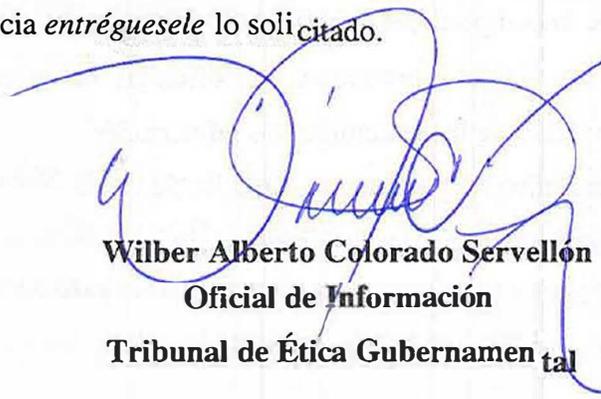
Por tanto, con base en los artículos 1 y 6 de la Constitución, 32 y 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, III de la Convención Interamericana contra la Corrupción, 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 13.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 3, 4, 19 letras f) y g), 20, 24, 25, 28, 30, 33, 36, 50, 62, 65, 66, 70, 71, 72 de la LAIP, 40, 50, 54, 55 y 57 de su Reglamento, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Tribunal de Ética Gubernamental, **RESUELVE:**

a) **Admítase** la solicitud de información planteada por el señor [REDACTED]

b) **Concédase el acceso a la información** al señor [REDACTED]

[REDACTED], en consecuencia *entreguesele* lo solicitado.

Notifíquese.


Wilber Alberto Colorado Servellón
Oficial de Información
Tribunal de Ética Gubernamental

